

# argentina: iglesia dividida

abel sardiñas

La destitución de un obispo, la renuncia de 30 sacerdotes y las actitudes diametralmente opuestas asumidas por los jefes conservadores y los sacerdotes progresistas ante los violentos sucesos de mayo 69, son —entre otros— los hechos que en los últimos tiempos han puesto de manifiesto la división existente entre los sectores tradicionalistas y los renovadores en el seno de la Iglesia Católica Argentina.

En opinión de la revista bonaerense «Extra», «Ahora el impacto de la pasión y muerte de Camilo Torres, el sacerdote colombiano caído en la guerrilla, es mucho más que un *poster* ideológico. Se ha introducido —rabiosamente— en la conciencia, en la práctica diaria de los curas —y laicos— argentinos. La canalización de este generoso fluir desbordará eventualmente el canal de la no violencia en el que se hallan navegando la mayoría de sus generadores. Pero pacífica o abruptamente, como la situación legal la reclama, la Iglesia también ha dicho basta y ha echado —ella también— a andar.»

En general, la afirmación de «Extra» se acerca bastante a la actual situación del clero argentino, aunque sería iluso compartir la afirmación de que la Iglesia toda «ha dicho basta y ha echado —ella también— a andar», porque si bien es cierto que un crecido número de sacerdotes argentinos se han sumado a las posiciones progresistas y renovado-

## NOTAS

ras que cobran fuerza entre los católicos del continente, no lo es menos que la jerarquía eclesiástica de ese país, en su gran mayoría, se encuentra firmemente apegada a las más conservadoras y tradicionales posiciones de la Iglesia Católica.

### **PODESTÁ: «LA OVEJA NEGRA»**

Esta posición tradicionalista y conservadora de la mayoría de la jerarquía eclesiástica argentina quedó demostrada en la actitud asumida contra monseñor Jerónimo Podestá, obispo de Avellaneda —diócesis de un millón 250 mil fieles situada en los suburbios de Buenos Aires— quien, si bien no es el representante de las corrientes más progresistas dentro del clero, es por lo menos el que, por la gravitación que le daba el cargo, se había convertido en el obispo «postconciliar» más famoso del país, el que mantenía una actividad pública más difundida. La «oveja negra» de la jerarquía.

El 4 de diciembre de 1967 monseñor Podestá renunció al obispado —según dijo— a solicitud del papa Paulo VI. Se supo, sin embargo, que esta solicitud papal estuvo determinada por las peticiones que en ese sentido recibió tanto del régimen militar como de los sectores más reaccionarios de la Iglesia y del entonces representante del Vaticano en Argentina, el nuncio apostólico Humberto Mozzoni.

La «renuncia» de Podestá fue la culminación de todo un plan —en el

que trabajaron tanto los elementos reaccionarios de la jerarquía como funcionarios del régimen— encaminado a eliminar de la vida pública al obispo. Entre los muchos ataques recibidos por Podestá antes de su destitución, se destaca el ocurrido el 7 de mayo de 1967, un día después de pronunciar una conferencia sobre la injusticia social del capitalismo y de hacer declaraciones a la prensa criticando al régimen militar, cuando «personas desconocidas», desde un automóvil en marcha, arrojaron tres bombas de fabricación casera contra el obispado de Avellaneda.

El 19 de diciembre Podestá da a conocer una declaración en la que libra a Paulo VI de culpa y afirma que, «contrariamente a lo que jamás hubiera podido creer ni pensar, la difamación y la calumnia se lanzaban al público incluso desde algunos altos círculos eclesiásticos».

Dos días después de la destitución de Podestá —el 6 de diciembre, un grupo de sacerdotes y trabajadores fueron dispersados por la policía en las calles de Avellaneda cuando manifestaban a los gritos de «Viva Podestá, abajo el Nuncio». Al día siguiente más de cien personas se concentraron frente a la nunciatura en Buenos Aires para demandar la destitución del Nuncio.

A mediados de enero de 1968, el «Comando Camilo Torres» emitió una declaración de solidaridad con

**NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO**

Podestá, en la que decía: «tenemos que prepararnos a enfrentar, como el obispo Podestá y laicos de Brasil, una persecución por parte del gobierno, de sus mecanismos y leyes represivas, de sus organismos de calificación ideológica y de sus armas de difamación y acción psicológica». Además, condenaba a los hipócritas y fariseos de la jerarquía y del clero.

A fines de mayo de 1968, 26 sacerdotes dirigieron una carta al Papa advirtiéndole que el futuro obispo de esa diócesis tendría que ser un hombre dispuesto a «despojarse de todo compromiso con los promotores del imperialismo internacional del dinero».

Sin embargo, aunque en un principio se creyó que sí, el obispo designado para sustituir a Podestá —monseñor Antonio Quarracino— no se ajustaba a la demanda de los sacerdotes. La jerarquía eclesiástica se había librado de la «oveja negra» y no estaba dispuesta a nombrar otro obispo progresista, pero a la vez la labor desarrollada por Podestá en su diócesis hacía imposible que se designara a un prelado conservador sin dar origen a un conflicto interno. La solución fue Quarracino, a quien se califica de «moderado».

### **OTRAS «PURGAS»**

El caso de Podestá fue el más sonado, pero no es el único. A mediados de septiembre de 1966, fueron castigados con la suspensión de su ejercicio ministerial los sacerdotes Nel-

son Delaferrara y Orestes Gaido, por permitir que en su templo, la iglesia Cristo Obrero, de Córdoba, 38 estudiantes realizaran una huelga de hambre en protesta por las medidas de fuerza que aplicaban los militares contra las universidades.

Igualmente se prohibió a Alejandro Rojas, capellán del liceo militar «General Vaz», que oficiara misas fuera de ese lugar, debido a que dijo una en la iglesia Cristo Obrero al terminar los estudiantes su ayuno de protesta.

En octubre de 1966, Gaido y Delaferrara firmaron una «Carta de Despedida», en la que, tras rechazar las múltiples acusaciones que se les hacían, puntualizaban:

«Hubo sí, un hecho del cual nos hacemos totalmente responsables y que en sus diferentes manifestaciones constituyó la columna vertebral de toda nuestra acción parroquial: nuestro compromiso con el estudiantado. Él fue nuestra meta suprema y nuestra solicitud constante por que firmemente creemos que una Iglesia incapaz de hacer suyos los gozos y esperanzas, las alegrías y tristezas de los hombres y ambientes en que actúan, no es la Iglesia del Verbo hecho carne, no es la Iglesia del Evangelio, no es la Iglesia del Concilio Vaticano II.»

Posteriormente, en declaraciones a la revista «Así», los dos sacerdotes

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

dijeron que habían sido «víctimas de los últimos estertores que está dando una Iglesia con mentalidad reaccionaria, caduca».

En marzo de 1968 la furia de la jerarquía conservadora, representada por el obispo Antonio Aguirre, de San Isidro, importante diócesis próxima a Buenos Aires, recayó sobre los sacerdotes españoles Jesús Naves y Joaquín Fernández, quienes actuaban en las «villas miseria» que rodean a la capital argentina.

Después de acusarlos de que «venían haciendo una prédica inflamada por ideologías extremistas», Aguirre «pidió» a los dos sacerdotes que abandonaran el país.

En una conferencia de prensa ofrecida antes de partir de Argentina, los dos sacerdotes dijeron que en varias ocasiones el obispo Aguirre les había llamado la atención, y acusaron al nuncio Mozzoni y al cardenal primado de la Argentina, monseñor Antonio Caggiano, de ser los culpables de la «mentalidad conservadora» que impera en la Iglesia del país.

Ya el 4 de febrero el equipo de nueve curas obreros que trabajaba junto a los dos expulsados había dirigido una carta a Aguirre, en la que se mostraban extrañados «por las conversaciones que Ud. ha sostenido con nuestros compañeros Jesús Naves y Joaquín Fernández en las cuales Ud. ha manifestado su deseo de que no

colaboren más en la acción pastoral de esta Diócesis».

Quince días después, el 19 de febrero, más de 700 fieles de la diócesis de San Isidro también se dirigieron a monseñor Aguirre a través de una carta en que acusaban a la Iglesia de «ambigüedad, doblez e hipocresía», de no intervenir «en defensa de la Justicia por temor a perder privilegios que usufructúa», de limitar la libertad del hombre y de apartar al obrero.

También decían que la jerarquía es un «elemento de freno» que «utiliza la fuerza de la Iglesia como elemento de presión» y añadían que deseaban ver a la Iglesia «más comprometida con los problemas humanos y dando adecuadas respuestas a los mismos».

### ECOS DE UNA RENUNCIA

A fines de 1968, 38 sacerdotes de la diócesis de Rosario dirigieron una carta al arzobispo Guillermo Bolatti, protestando por la «falta de sensibilidad social» de éste. El arzobispo, por toda respuesta, suspendió de sus funciones clericales a dos sacerdotes: Francisco Parenti y José María Ferrari. Fue esta la gota de agua que desbordó el vaso: el 15 de marzo de 1969, después de múltiples insistencias por llegar a un entendimiento con Bolatti, 30 sacerdotes rosarinos renuncian a sus cargos ministeriales.

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

«Nunca, en la historia de la Iglesia argentina, hubo una crisis de tamaña envergadura», expresaba la revista «Primera Plana» al comentar el hecho pocos días después, cuando aún la crisis no se había manifestado en toda su «tamaña envergadura».

«Largo tiempo venimos haciendo, individual y colectivamente, reiterados esfuerzos por entablar un diálogo con usted», dicen los sacerdotes en la carta-renuncia enviada a Bolatti, le recuerdan que «negándose a escuchar sus motivos, usted censura con gravísima suspensión total a dos sacerdotes», lo acusan de mantener una «actitud insensible, fría e indiferente», y puntualizan que renuncian a sus cargos ministeriales «porque de inmediatos y necesarios colaboradores nos vemos instrumentados en cómplices de «una situación de injusticia y pecado» que constituye un triste y escandaloso testimonio para la comunidad de la iglesia y de los hombres».

Monseñor Bolatti riposta diciendo que «lamenta la actitud asumida por estos sacerdotes y los exhorta una vez más a reflexionar serenamente sobre esta decisión». Inmediatamente vuela a Roma para entrevistarse con el Papa —sufre un accidente que lo obliga a demorarse más tiempo del deseado — y al regresar a fines de mayo, muestra eufórico una carta en que Paulo VI lo apoya en su actitud al exhortar a los sacerdotes a «no olvidar que tan sólo en unión y en dócil y confiada colaboración

con el propio obispo, los sacerdotes y laicos, comprometidos en el servicio de la Iglesia, pueden realmente asegurar a ésta el bien y los progresos que su amor les lleva a desear».

Sin embargo, a pesar del apoyo pontifical, Bolatti tuvo que enfrentarse a una dura realidad: durante su ausencia, los 30 sacerdotes renunciantes habían recibido —entre otras muchas— la adhesión de casi 500 sacerdotes de distintas diócesis, de numerosas organizaciones católicas y de centenares de feligreses, tanto de Rosario como de otras partes del país.

Una de estas cartas de adhesión a los renunciantes, firmada por más de 300 sacerdotes, puntualizaba que «lo que sucede en Rosario es la repetición de situaciones ya dadas de alguna manera, en varias diócesis de nuestra patria, y el anuncio de lo que muy posiblemente sucederá en otras», agregaban que «hechos como el de Rosario configuran una imagen de la iglesia que obstaculiza gravemente nuestra actividad pastoral» y que en los mismos se percibe «una evidente contradicción entre el espíritu del concilio, y su aplicación concreta por parte de nuestro episcopado».

Más adelante censuraban la forma en que se designan actualmente los obispos sin la participación de las comunidades eclesíásticas; la inoperancia de la Conferencia Episcopal

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

Argentina, la falta de diálogo y la desconexión con las bases que practica la jerarquía, la marginación de los sacerdotes renovadores y la insensibilidad del episcopado ante la injusticia social.

«Estamos dispuestos, ante situaciones similares que se van gestando dolorosamente en otras comunidades diocesanas, a adoptar medidas tan firmes y sinceras como las de nuestros hermanos de Rosario», advertían los sacerdotes firmantes.

Bolatti comenzó a maniobrar en un intento por solucionar la crisis, pero manteniéndose firme en sus posiciones. Sin embargo, tras declarar que consideraba «no presentadas» las renunciaciones y de reunirse en dos ocasiones con los sacerdotes, Bolatti tuvo finalmente que aceptar las renunciaciones a principios de junio.

Después de las reuniones con Bolatti, los sacerdotes emitieron un comunicado declarando «que el diálogo fue imposible, comprobamos que el señor obispo mantenía sus decisiones, tomadas con anterioridad y sin diálogo de manera inapelable».

Pero Bolatti no estuvo sólo. Además del apoyo de la jerarquía conservadora y de la carta de Paulo VI, también recibió las adhesiones de 118 sacerdotes, del Movimiento Nacional de la Juventud Anticomunista, de la Federación Argentina de Mujeres de Negocios y Profesionales de Rosario, de la ultraderechista «Sociedad Cristiana de Defensa de la Tradición,

la Familia y la Propiedad». «Dime con quién andas y te diré quién eres.»

Al conocerse la decisión de Bolatti de aceptar las renunciaciones de los sacerdotes, los fieles de cinco de las localidades donde éstos desarrollaban su labor procedieron a ocupar los templos en demanda de que el arzobispo reconsiderara su actitud.

En una de estas iglesias, la de la localidad de Cañada de Gómez, a mediados de julio se produjeron violentos incidentes cuando la policía intentó posesionar por la fuerza en su cargo al nuevo cura párroco designado por Bolatti en sustitución de uno de los renunciados.

Más de dos mil personas lucharon durante varias horas con la policía, que primero utilizó sus granadas de gases lacrimógenos y después echó mano a las armas de fuego, dejando un saldo de cinco feligreses heridos y 29 detenidos.

El nuevo cura párroco pudo penetrar en la iglesia gracias a que la policía, después de dispersar a los feligreses, violentó la puerta del templo. Pero el primer matrimonio anunciado se suspendió porque la novia no se hizo presente, y en la primera misa sólo se encontraban cuatro fieles. Al día siguiente a estos violentos sucesos, la localidad de 30 mil habitantes amaneció totalmente paralizada por una huelga de protesta.

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

La renuncia de los sacerdotes rosarinos no parece ser un capítulo cerrado. No es la primera ni seguramente tampoco será la última manifestación del cisma que separa a progresistas y conservadores dentro de la Iglesia argentina.

### CURAS COMPROMETIDOS

Una muestra de este hecho es el auge que por días cobra el movimiento de sacerdotes progresistas en todo el país.

Desde las provincias más empobrecidas del país, y desde las «villas miseria» que se levantan en los suburbios de Buenos Aires y otras ciudades del país, salen —cada vez con más periodicidad y con mayor número de firmantes— las declaraciones de sacerdotes denunciando las condiciones de vida en esos lugares, la represión institucionalizada, y otros males similares. También salen de esos lugares las noticias de sacerdotes que encabezan manifestaciones de obreros en demanda de trabajo o de estudiantes en lucha contra la opresión.

En Tucumán, donde después del golpe militar de 1966 fueron cerradas numerosas industrias que dejaron desempleados a miles de obreros, principalmente azucareros, es donde se manifiesta con más fuerza y combatividad este movimiento de lucha junto a los obreros. Unos 35 sacerdotes encabezados por un obispo están integrados en este movimiento, y han debido enfrentarse en más de

una ocasión a la policía, que los ha golpeado y apresado.

En abril de 1967, la Juventud Obrera Católica (JOC) y el Movimiento Obrero de Acción Católica emitieron una declaración conjunta en la que criticaban al régimen por su injusta política social y económica. La declaración también se refería a la situación de miseria imperante en Tucumán, a la persecución de dirigentes gremiales y a la intervención militar de sindicatos. Ni corto ni perezoso, el secretariado del episcopado argentino reprendió a los dirigentes de ambas organizaciones.

El domingo 7 de enero de 1968, después de officiar una misa, el sacerdote César Raúl Sánchez se incorporó a una manifestación obrera que protestaba contra los despidos masivos en el ingenio «San Pablo». La manifestación fue violentamente reprimida por la fuerza pública y Sánchez fue detenido y sometido a interrogatorio.

El día 12 los sacerdotes Pedro Lurschmidt y Ramón Villalobo firmaron junto a Sánchez una declaración condenando la arbitrariedad policial. El 17, el vicario capitular de la arquidiócesis de Tucumán, Víctor Gómez Aragón, y veinte sacerdotes, enviaron una carta al gobernador provincial, general Fernando Aliaga García, en la que defendía la participación del sacerdote en la manifestación y decían que «el origen de los

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

desórdenes no está en la intención del sacerdote ni en su presencia en la caravana, sino en la injusticia que sufre el pueblo». Anteriormente el gobernador Aliaga García había remitido una nota al vicario capitular censurando la participación del cura en la demostración obrera.

El mismo día que recibió la carta, el gobernador viajó a Buenos Aires para discutir el problema en las altas esferas del régimen militar. Al día siguiente se pronuncia a favor del vicario la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), el Consejo Arquidiocesano de los Jóvenes de Acción Católica y el Movimiento Encuentro Social Cristiano.

En ocasión de celebrarse el Primero de Mayo, varios obreros fueron lesionados y detenidos en el ingenio azucarero «Bella Vista», durante una manifestación en la que marchaban dos sacerdotes, los cuales fueron golpeados por la policía, que incluso, dañó las imágenes religiosas con los gases lacrimógenos.

Este incidente llevó a un grupo de sacerdotes de la provincia a emitir un documento de protesta, y al arzobispo de Buenos Aires, Antonio Caggiano, a criticar —en una entrevista para «La Nación»— la actitud de los sacerdotes que participan en las luchas obreras, señalando que éstos deben limitarse a dar a los obreros asistencia religiosa y no asistencia sindical.

Dos meses más tarde, el 3 de julio de 1968, Caggiano declaró que «se está haciendo la apología de la violencia y predicando la necesidad de la revolución social, y esta propaganda cunde entre los católicos y autoridades de la Iglesia, sin que tengan en cuenta los mandatos de ésta».

Sin embargo, ni la represión policíaca, ni las críticas de Caggiano, fueron capaces de frenar al combativo grupo de curas tucumanos en su lucha junto a los obreros. Nuevas manifestaciones se producirían en el resto de 1968 y en los primeros meses de 1969, y en ellas —junto a los trabajadores— siempre pudo verse a sacerdotes que, al igual que éstos, eran golpeados y detenidos, o abrían las puertas de sus parroquias para dar refugio a los perseguidos.

Vale la pena destacar una declaración que, a principios de marzo de 1969, dirigieron 13 sacerdotes de Tucumán al arzobispo coadjutor de Buenos Aires, monseñor Juan Carlos Aramburu, en respuesta a una advertencia suya a los sacerdotes de su diócesis, a quienes dijo que «no se debe comprometer la misión de la Iglesia» y que «al sacerdote, como tal, no le incumbe (en el terreno político) la decisión, ni el liderazgo, ni tampoco la estructuración de soluciones», a la vez que enfatizaba: «no tomen resoluciones o realicen actos públicos, en las mencionadas materias, sin previa autorización».

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO



En su carta, los sacerdotes preguntaban a Aramburu: «¿cómo quiere usted, Padre, que los sacerdotes en contacto con la realidad vital que padece nuestro pueblo, queden callados, esperando instrucciones que nunca llegan, si es vox pópuli que nuestros obispos, salvo honrosas excepciones, parecen estar en connivencia con las actuales autoridades e instituciones causantes de los males que es preciso denunciar?»

Tucumán es la provincia donde con más fuerza se han manifestado las ideas progresistas en el clero, pero estas ideas también han llegado a las demás regiones del país, incluso a Buenos Aires.

En enero de 1967, el obispo y los sacerdotes de la diócesis de Reconquista, provincia de Santa Fe, dieron a conocer un documento denunciando la miseria en que vive la población de la zona monte, y acusaban a los gobiernos que se han sucedido en el país de ser los responsables de esa situación por haber dejado intacta «no sólo la actual explotación del hombre por el hombre, sino las causas jurídicas y económicas que posibilitan esta vergonzosa explotación».

Dos meses más tarde, 24 de los sacerdotes firmantes de este documento emiten una nueva declaración, en la que señalaban que habían creído ingenuamente que su denuncia había manifestado interés por resolver el problema en los organismos del Es-

tado, pero que, lejos de eso, la situación se agravó con el cierre del ingenio azucarero de Tacuarendí y la reducción de los talleres de reparación de vagones ferroviarios.

En un comunicado emitido con motivo del Primero de Mayo de 1968, un grupo de sacerdotes y fieles de la provincia de Santa Fe criticaron la política económica del régimen y sus intentos de construir «una Universidad para las clases altas», a la vez que se adhirieron a los reclamos de los trabajadores que han quedado desempleados por el cierre de sus centros de trabajo. Posteriormente el cardenal Nicolás Fasolino, arzobispo de Santa Fe, condenó la aparición del documento porque a su juicio la Iglesia no resultaba favorecida con su publicación.

Unos días después, 14 sacerdotes, dos presbíteros y 150 laicos de la misma provincia firmaron un manifiesto criticando tanto al régimen militar como a la jerarquía eclesiástica. «Nos resistimos a aceptar calladamente —decían— la pasividad de nuestros pastores, que en las actuales circunstancias parecen adoptar características de complicidad.»

En Santa Fe, al igual que en Tucumán, existen numerosos sacerdotes que encabezan las manifestaciones de obreros que reclaman trabajo. Pero el episodio más importante ocurrido en esta provincia fue la re-

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

nuncia de los 30 sacerdotes de la diócesis de Rosario, citado más arriba.

En la provincia de Corrientes, se dio a conocer en agosto de 1968 una declaración firmada por 12 sacerdotes, numerosos fieles, militantes universitarios y sindicales, así como por el Movimiento de la Juventud Peronista y el Movimiento Comunitario, en la que se hacía un análisis de la situación existente en esa provincia.

«En Corrientes mueren 1 580 niños al año, 132 por mes, 4 por día», dice la declaración y agrega que «el 50% de las tierras aptas para la agricultura y la ganadería pertenece a un grupo de 30 familias y sociedades, que en general las mantienen improductivas o mal explotadas.»

Denuncian además los bajos niveles salariales que se pagan, el desempleo y subempleo existente, las condiciones infrahumanas en que es mantenida la población campesina y la existencia de 90 mil analfabetos, así como que el 80% de la renta se distribuye entre los terratenientes.

«La eliminación del sistema injusto que nos rige es un desafío a nuestra generación», dice la declaración y puntualiza: «Ante estos hechos no tiene derecho a permanecer pasivo, tranquilo y despreocupado, porque la seguridad grande o pequeña que Ud. goza dentro del sistema está asentada sobre el sufrimiento de muchos hermanos.»

En la provincia de Formosa, un grupo de sacerdotes de la Acción

Misionera Argentina dan a conocer a principios de 1969 una declaración sobre la situación que palparon en la localidad de Ingeniero Juárez.

«Denunciamos —dice la declaración— 1. El trato inhumano que reciben los más humildes de la comunidad. 2. Los salarios de miseria. 3. El menosprecio de la dignidad humana. 4. Los excesivos y arbitrarios impuestos que soporta la población», y agregaban los sacerdotes que se les prohibió efectuar una reunión para hablar con los habitantes del lugar sobre temas sociales y religiosos, así como se les acusó de comunistas por cumplir su misión.

El 8 de mayo de 1969, 14 sacerdotes de la provincia de San Juan emiten una declaración precisando que en esa región «existe una deplorable situación de injusticia que como pastores sentimos urgencia de denunciar», y puntualiza que esta situación está caracterizada por las crecientes cesantías de trabajadores, la racionalización administrativa que afecta a los más pobres e indefensos, la desocupación que aumenta por días y que provoca una emigración masiva de la población de la provincia, los sueldos de hambre que se pagan, la violación de las leyes laborales.

Criticando «el silencio culpable de responsables y dirigentes sindicales que deberían denunciar y enfrentar honestamente la situación imperante», afirman que esta situación es respon-

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

sabilidad tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y de las llamadas «fuerzas vivas», y enfatizan: «Nuestra intención es ponernos al lado de los que sufren, tienen hambre y se encuentran esclavizados por el miedo y la impotencia. Así lo hizo Jesús. Y en la medida de nuestras posibilidades tenemos la voluntad de asumir nuestro compromiso como lo pide la iglesia en América Latina.»

### SACERDOTES DEL TERCER MUNDO

A fines de agosto de 1967, más de 270 sacerdotes de 23 diócesis se adhieren al manifiesto de los 18 obispos del Tercer Mundo y expresan: «deseamos vivamente que nuestros obispos también se adhieran públicamente a este mensaje».

El deseo no se cumplió porque los jerarcas conservadores de la Iglesia argentina no pensaban en modo alguno dar su apoyo a ese documento, pero este hecho es el antecedente más directo de lo que hoy es el «Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo», que, con unos 400 militantes en la actualidad, enrola en sus filas a los elementos más progresistas del clero argentino.

Poco más de un año después, durante las festividades pascuales de 1968, los sacerdotes enrolados en este movimiento fueron los principales protagonistas del enfrentamiento más grave que hasta ese momento se

había producido entre el clero progresista y el régimen militar.

En esos días un grupo de curas jóvenes se dedicó a repartir volantes con acusaciones al régimen por su inhumana política económica y social con los pobladores de los barrios marginales («villas miseria»), a la vez que se abría una polémica entre varios sacerdotes y el gobernador de la provincia de Neuquén debido a la defensa que éstos hacían de centenares de obreros estafados por una empresa que recibía fondos oficiales para obras públicas.

El general Juan Carlos Onganía debió asistir estupefacto al episodio de dos decenas de sacerdotes parados frente a la casa de gobierno hasta que consiguieron que dos de ellos fueran recibidos. Los dos sacerdotes entregaron a Onganía una declaración en que se ponían al desnudo sus anunciados planes de erradicación de las «villas miseria».

También circularon numerosas declaraciones de sacerdotes que criticaban al régimen militar, una de las cuales estaba firmada por siete curas tucumanos, en la que podía leerse: «cuando la injusticia, la intranquilidad y la angustia afligen a los pobres y desamparados y la falta de trabajo y vivienda, la miseria y el hambre pesan sobre muchos hermanos nuestros, y cuando los que poseen el poder parecen incapaces para procurar la paz, el bie-

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

nestar y el desarrollo, no podemos decir felices fiestas».

Pero el episodio que cerró el año, y a la vez el que mayor malestar provocó en las altas esferas militares y católicas, fue la decisión de más de 60 sacerdotes y tres obispos de todo el país de no celebrar la tradicional «misa del gallo» en protesta por la situación económica y social existente en América Latina, y en Argentina particularmente.

La insólita negativa se completó con un ayuno de 50 horas realizado por 12 curas católicos y tres pastores protestantes, junto a un grupo numeroso de laicos, entre ellos activistas y dirigentes sindicales. Ayuno al cual se sumaron sacerdotes de numerosas parroquias.

Al terminar el ayuno, se dio a conocer el «Compromiso de Navidad» de los «Sacerdotes para el Tercer Mundo», en el que decían que «ésta se ha tornado ya con dramática urgencia la hora de la acción», y denunciaban el hambre, el analfabetismo, las enfermedades endémicas, el enorme problema habitacional, el armamentismo, la discriminación, la injusta distribución de tierras y la desocupación, cuyas consecuencias son sufridas por millones de hombres en todo el mundo, en América Latina y en Argentina.

En numerosas declaraciones posteriores, los «Sacerdotes para el Tercer Mundo» han analizado a fondo la actual situación argentina, han

reiterado sus denuncias y se han pronunciado contra la propiedad privada sobre los medios de producción y por la implantación de una sociedad socialista en el país.

El 16 de julio de 1969, el diario bonaerense «La Razón» publicó una síntesis de una declaración que dijo había sido aprobada por los «Sacerdotes para el Tercer Mundo», en la cual se planteaban que «Dada la experiencia histórica y la situación creada por un estado de violencia institucionalizada y de represión sin escrúpulos, no se vislumbra una salida verdadera y eficaz que no apele a la lucha armada del pueblo por su total liberación y por la instauración de un auténtico socialismo. Se descartan, tanto la «conversión» de los opresores como las posibilidades de triunfo, en América Latina, de un movimiento de «no violencia activa».

El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo ha de extremar todas las medidas posibles para no ser excluido de la Iglesia estructural, ya que consideramos que es toda la Iglesia la que tiene el deber de entrar en el proceso.

Sin embargo, esto no deberá aceptarse nunca al precio de una traición, al proceso revolucionario.

Haremos todo lo posible para que, de hecho, la división y oposición no pase entre Movimiento y Jerarquía,

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

sino entre una parte de la Jerarquía que comprende y vive el proceso estando de parte del pueblo y otra que, por no comprenderlo, está de hecho contra el pueblo.

Inmediatamente la Curia Metropolitana emitió un comunicado aclarando (no hacía falta que lo aclarara) que esta declaración no representa «la voz de la jerarquía» y que la misma no fue aprobada por todos los asistentes al Encuentro de Córdoba, «y por lo tanto no son conclusiones del Encuentro, aunque habría circulado en el mismo».

La Curia aprovechaba la ocasión para ratificar su criterio de que «el hacer la apología de la violencia presentado la lucha armada como salida verdadera y eficaz para la solución de los problemas sociales estaría no sólo contra la declaración del episcopado argentino en San Miguel y las conclusiones de Medellín, sino también contra las orientaciones del Concilio Vaticano Segundo y las mismas enseñanzas del Papa que dice de la violencia que no es cristiana ni evangélica».

Al respecto, dos sacerdotes, en nombre del «Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo de Buenos Aires», emitieron un comunicado de prensa aclarando que no se trataba «de un documento emitido por nuestro Movimiento».

De todas formas, existe un hecho: en el Encuentro de Córdoba celebrado por los Sacerdotes para el Tercer

Mundo, esta declaración circuló como documento de trabajo y, aunque no haya sido adoptada por no contar con la aprobación de todos los participantes, es un punto de referencia el que se haya redactado y discutido (con la aprobación de algunos incluso), lo que indica que ya en el seno de este movimiento se mueven fuerzas que se aproximan a las posiciones más revolucionarias del clero, posiciones de las cuales el más claro ejemplo es el sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres.

### **PROGRESISTAS Y CONSERVADORES ANTE EL CORDOBAZO**

Las posiciones diametralmente opuestas asumidas por los sectores progresistas y conservadores del clero argentino ante los violentos sucesos ocurridos durante los meses de abril, mayo y junio de 1969, pusieron de manifiesto —quizás como ningún otro hecho— la honda divergencia que separa a los integrantes de estas dos posiciones en el seno de la Iglesia Católica Argentina.

Los hechos comenzaron en abril, en la provincia de Corrientes, con manifestaciones estudiantiles en protesta por el aumento de precios en el comedor universitario y contra los intentos de las autoridades de entregar el mismo a una empresa privada. Quizás todo no habría pasado de ahí si la brutalidad policíaca no se hubiera ensañado con los jóvenes, uno

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

de los cuales, Juan José Cabral, fue asesinado el 15 de mayo.

Esta fue la chispa que hizo estallar el polvorín. A los estudiantes de Corrientes se sumaron los de otras ciudades y los obreros de todo el país. La «paz» de Onganía había llegado a su fin. El centro de la lucha se trasladó, a Rosario primero, y a Córdoba después, donde el 29 y 30 de mayo se produjeron violentos enfrentamientos entre los estudiantes y los obreros de una parte, y las fuerzas policíacas y militares del otro. En conjunto el saldo fue de más de 20 muertos, decenas de heridos y un incalculable número de detenidos.

En los meses siguientes los acontecimientos continuarían. Nuevas huelgas, detención de los principales líderes opositores, implantación del estado de sitio. La «dictablanda», como algunos la llamaban, se manifestó en toda su dureza represiva.

Pero veamos lo que en este caso nos interesa: la posición de los distintos sectores eclesiásticos ante estos hechos.

Junto a los estudiantes y obreros, numerosos sacerdotes progresistas participaron en las manifestaciones. Algunos incluso fueron arrestados.

A mediados de mayo, circuló una declaración de los «Sacerdotes para el Tercer Mundo», quienes denunciaban que «Se ha violentado el derecho a manifestar la opinión. Se ha golpeado a estudiantes y obreros hasta producir la muerte. Se ha em-

pleado la tortura y se ha usado impunemente y arbitrariamente el poder de las armas».

Posteriormente, el 27 de junio, estos sacerdotes publicaban un «Llamado: a los que detentan el poder, a los dirigentes populares», en el que, analizando los últimos sucesos, planteaban que es falso que los incendios y destrozos ocurridos en Córdoba hayan respondido a un «plan premeditado», así como que también es falsa la versión oficial de que las protestas del 29 y 30 de mayo fueron dirigidas «por manos extranjeras» o por «grupos extremistas».

«Estimamos —precisaban— que los acontecimientos de Córdoba responden a la reacción espontánea de un pueblo que adquiere día a día mayor conciencia de su dignidad», y continuaban exponiendo:

«La masa obrero-estudiantil que marchó por las calles de Córdoba es, para nosotros, un símbolo, un anticipo de lo que ha de suceder a no muy largo plazo con toda la masa popular argentina y latinoamericana que aspira a un orden nuevo en lo político, lo social, lo económico y lo cultural.

»El movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo sostiene que las estructuras del orden nuevo al que muchos hombres aspiran han de configurar una sociedad socialista. Una sociedad en la que todos los hombres tengan acceso real y efectivo a

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

los bienes materiales y culturales. Una sociedad en la que la explotación del hombre por el hombre constituya uno de los delitos más graves. Una sociedad cuyas estructuras hagan imposible esa explotación.

»Para que ello sea posible consideramos necesario erradicar definitiva y totalmente la propiedad privada de los medios de producción. Vale decir: erradicar para siempre el concepto de la empresa basada en el lucro como incentivo para el trabajo. «Esto significa aspirar a un tipo de hombre capaz de poner sus dones al servicio de la sociedad, a una sociedad capaz de proporcionar a cada hombre todo lo necesario para su pleno desarrollo.»

El 16 de mayo, en una alocución radial, monseñor Alberto Devoto, obispo de Goya, provincia de Corrientes, quien está señalado como el miembro más progresista de la jerarquía eclesiástica argentina, se refirió a los sucesos ocurridos el día anterior en Corrientes, donde resultó asesinado el estudiante Cabral.

Devoto recordó que en ocasiones anteriores había expresado que la rebelión estudiantil en el mundo no se limitaba a simples hechos callejeros, añadió que en ocasiones se alarmó al oír a quienes trataban ese asunto en forma superficial y que por eso tenía el temor de que los sucesos acaecidos en Corrientes el día anterior fueran interpretados por algunos como un hecho más.

Precisó que de lo que se trata es «de un conflicto entre quienes detentan

el poder y quienes quieren hacer uso de sus legítimos derechos a la libertad de expresión».

Expresó Devoto que «cuando un pueblo no puede canalizar sus aspiraciones por los medios habituales, es normal que busque otros medios, otros caminos, para expresar sus reclamos».

El 20 de mayo se da a conocer una declaración de 31 sacerdotes de Rosario, en la que se denuncia «la total falta de respeto por la vida humana», «la violencia empleada contra la expresión legítima y pacífica de los derechos humanos», «la inadmisibles autorización dada a los funcionarios del orden, por el código militar, para emplear las armas ante el más leve o supuesto desorden», y «la falsa y tendenciosa información que pretende atribuirlo todo a "elementos extremistas".»

También se conoció una declaración de 35 sacerdotes de Santa Fe —la mayoría de los cuales habían participado en las manifestaciones junto a obreros y estudiantes— quienes precisaban que «la violencia se ejerce cuando se impide, sistemáticamente, el acceso a los bienes fundamentales que requiere la persona humana», y denunciaban que los violentos son «los que imponen, colaboran o ayudan a consolidar las estructuras actuales», «aquellos que ordenan la represión contra los justos reclamos del pueblo», «los que colaboran, con

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

su silencio cómplice, al mantenimiento de las injusticias».

El 22 de mayo, la Comisión Nacional de la Juventud Obrera Católica (JOC) denunciaba que «el régimen que se llama a sí mismo "Revolución Argentina" no se conforma ya con una política socio-económica que provoca hambre, miseria y opresión: salarios insuficientes congelados y creciente alto nivel del costo de vida, intervención a los gremios, persecución, encarcelamiento y aun torturas de dirigentes sindicales e impunidad de los atropellos patronales, cierre de ingenios y de fuentes de trabajo, "racionalización", etc.».

Agregaba que ahora el régimen «asesina descarada y cobardemente» y precisaba más adelante que «En consecuencia: a) militantes y dirigentes jocistas con decisión asumimos el compromiso de liberación que esta hora histórica nos exige.»

En Tucumán, varios sacerdotes —incluyendo un capellán del ejército— dicen en una declaración: «Sepan los universitarios argentinos que nosotros, sacerdotes del pueblo de Dios, estaremos siempre junto a aquellos que sufren y son perseguidos por la búsqueda auténtica de la liberación integral del hombre», y precisan que los acontecimientos ocurridos significan «la repercusión en el campo universitario de la crisis que afecta la realidad argentina».

Por último, el 25 de mayo, 17 sacerdotes de Mendoza declaran que «la actitud de nuestros estudiantes

no puede ser tomada a la ligera. Ella coincide con la de los jóvenes de todo el mundo, y es signo de una transformación profunda de nuestra sociedad, que no podrá ser frenada ni postergada; detrás de un movimiento de aparente negación se gesta una creación real, profunda e irreversible».

«Sería un grave error —precisaban— limitar el problema al sólo ámbito estudiantil. Es el pueblo todo, en especial el pueblo trabajador, el que padece una situación de injusticia, oprimido por un sistema social absurdo, que lo hace víctima sistemática e impotente de la miseria, la ignorancia y la marginación.»

Y más adelante se comprometían: «queremos sentirnos solidarios de ese pueblo y servidores de sus necesidades. Ello implica, ineludiblemente, nuestra firme adhesión al proceso de cambio radical y urgente, y nuestro formal rechazo del sistema capitalista vigente y de su lógica consecuencia: el imperialismo económico y cultural, para marchar en la búsqueda de un socialismo latinoamericano que no implica subordinación a ninguna potencia ni a ningún partido, pero que incluye necesariamente la socialización de los medios de producción del poder económico y político y de la cultura. Un sistema, en suma, que creando un nuevo tipo de relaciones humanas, promueve el advenimiento del Hombre Nuevo».

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO



¿Y la jerarquía qué dijo? El 28 de mayo —visperas de los acontecimientos de Córdoba, pero cuando ya habían sido asesinados cuatro jóvenes— la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino emitió una declaración.

«No haremos, pues, cargos a nadie», se limitaban a decir los obispos, concientes de que en la situación de ese momento no podían —como lo han hecho reiteradamente— ofrecer su apoyo incondicional al régimen. O más claro, no podían declarar abiertamente ese apoyo.

Sin embargo, el episcopado —aunque no lo manifestó así— no hizo más que emitir una declaración de apoyo a los militares. No hubo una sola palabra —ni la más leve— de condena a la represión policiaca.

Los jerarcas conservadores se conformaban con decir que «los acontecimientos luctuosos que han conmovido tan hondamente a nuestro país, nos urgen a cumplir con el deber sagrado de defender la paz de nuestro pueblo, alterada por la violencia, que lamentablemente ha causado víctimas».

Arremetían contra la justa violencia de los estudiantes y obreros que se enfrentaban a la violencia represiva de los cuerpos represivos, al decir: «Faltaríamos a nuestro deber (¿con el régimen militar?) si no añadiéramos que, en los momentos actuales, dada la tendencia de grupos de ideología materialista-atea, comprometidos en el cambio total de todas

las estructuras sociales, la implantación de la violencia puede significar el comienzo de la destrucción».

Y por si quedaran dudas, condenaban el derecho de los obreros a la huelga. Decían los jerarcas conservadores que «El derecho a la protesta y el derecho a la huelga, en principio, son legítimos. Pero en el caso de lesionar el bienestar general de todos los habitantes de la nación, pierden su legitimidad.» Después, la represión siguió, los muertos pasaron de veinte, y los obispos callaron.

Parodiando un poco al periodista brasileño Paulo Schilling, podría decirse que, en opinión de la jerarquía eclesiástica argentina, Dios debía vestir el uniforme de la policía de Onganía. Pero hay decenas de sacerdotes —e incluso algunos obispos— que no piensan así. Y ahí, precisamente, está el germen de la división existente entre conservadores y progresistas.

Todos dicen creer en la existencia de Dios. Pero, mientras para unos ese Dios debe vestir un uniforme policiaco y, provisto de armas de fuego, garrote y gases lacrimógenos, emprenderla contra el pueblo, para otros ese Dios debe estar vestido de obrero o estudiante y comprometido en el cambio de estructuras que es necesario realizar.

Incluso, no faltan los que ya están convencidos de que ese cambio de

NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO

estructuras deberá hacerlo un Dios que suba a la montaña con un fusil al hombro.

### **ONGANÍA Y LA VIRGEN MARÍA: MATRIMONIO PERJUDICIAL**

El domingo 30 de noviembre de 1969, el general Juan Carlos Onganía dio una grotesca exhibición de su orfandad popular durante las ceremonias religiosas destinadas a la «consagración del país al immaculado corazón de la Virgen María».

Desde tres semanas antes el régimen hizo mover todos sus recursos propagandísticos para la ceremonia, que se celebró en el santuario de Luján, a 70 kilómetros de Buenos Aires, y utilizó todas sus posibilidades movilizativas y de transporte para concentrar por lo menos a cien mil personas.

El día fue espléndido, no llovió y el sol brillaba maravillosamente, los trenes y ómnibus gratis para la ceremonia circularon puntualmente, sólo que vacíos. En total, no pasaban de 600 personas —de ellas por lo menos 200 policías uniformados y de civil— quienes acompañaron a Onganía en su peregrinaje de 17 kilómetros a pie hasta el santuario. Al llegar a Luján, sólo 6 mil personas —dos mil soldados incluidos— le dieron la bienvenida.

Pero esto no fue quizás lo más grave. De hecho Onganía se vio por vez primera enfrentado a un amplio sector de la Iglesia, y también por

vez primera los jerarcas que le son más allegados —Caggiano entre ellos— no osaron acompañarlo con una declaración pública de apoyo en esta peligrosa aventura.

Los primeros en reaccionar contra la maniobra del régimen fueron los «Sacerdotes para el Tercer Mundo», quienes cuatro días antes de la fecha fijada para la «consagración» declararon: «el pueblo espera otra cosa, en lugar de que se le diga que el país se hunde y no queda otro camino que rezar».

«Esperamos que el pueblo no acuda a una cita en que lo religioso amenaza con ser usado como estupefaciente de las inquietudes del mismo pueblo», decían y expresaban su «desconcierto, estupor e indignación ante tal invitación, que hace estallar nuestra conciencia cristiana de modo que no podemos callar».

«El presidente —agregaban— parece apelar a lo religioso en un tono que raya con la desesperación de quien no encuentra salida. Es como un médico que desahuciara al enfermo y nos lanzara la fórmula fatal de que la ciencia ya nada puede hacer y que no queda otra cosa que pedir el milagro de la curación del moribundo.»

«Pero como el presidente es político, sabemos que la política no se hace con milagros», añadían más adelante; denunciaban que este acto tiene fines políticos y expresaban

**NOTAS ● NOTAS ● NOTAS ● NO**

sus esperanzas de que «los obispos no sean instrumentos de una alianza con el poder político».

En sentido similar se pronunciaban 15 sacerdotes de la provincia de Neuquén, quienes denunciaban «la intromisión del poder civil en asuntos religiosos, arrogándose, en este caso, la representación de todo un pueblo que no es exclusivamente católico», y se preguntaban si el régimen pretendía «consagrar» a la Virgen la despoblación de tierras, las diferencias entre ricos y pobres, la desproporción entre los salarios que ganan los funcionarios y los que ganan sus obreros y empleados.

A la protesta se sumaba un grupo de sacerdotes y laicos de la ciudad de Bahía Blanca, así como numerosos jerarcas, algunos de ellos incluso conservadores, quienes también expresaron su protesta, o en otros casos se negaron a cumplir las disposiciones del régimen de movilizar al pueblo para la ceremonia.

Después de la ceremonia del 30 de noviembre, Onganía calló. No quiso hablar más de la «consagración» ni de nada que estuviera relacionado con ella. El golpe fue muy duro. Fue, quizás, uno de los más graves errores políticos cometidos durante su mandato.

Lo que pensó le resultaría un matrimonio fructífero se transformó en unión ilegal. Sin duda no querrá hijos de esa unión y por eso prefiere callar, ya que no hay posibilidad de divorcio.

## NOTAS:

1 El Manifiesto de Obispos del Tercer Mundo, firmado por 18 jerarcas católicos, ocho de ellos brasileños, fue publicado el 31 de agosto de 1967 en el semanario francés *Temoignage Chrétien*.

Este documento hace un análisis de la situación de los pueblos subdesarrollados del Tercer Mundo, comete el error de vincular a la Unión Soviética y la República Popular China junto a las grandes potencias occidentales que explotan a estos pueblos, admite que la Iglesia ha estado vinculada a los distintos regímenes políticos imperantes a través de las épocas y proclama que debe liberarse de estas ataduras y no reconocer como marido más que a Cristo.

Tras afirmar que «la Iglesia desde hace un siglo, ha tolerado el capitalismo». El Manifiesto pasa a referirse a la inminente venida del socialismo y afirma que la Iglesia «no puede más que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de esta moral». «Los cristianos —agrega— tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental.» Lejos de contrariarse con él, sepamos adherirlo con alegría, como a una forma de vida social mejor adaptada a nuestro tiempo y más conforme con el espíritu del Evangelio. Así evitaremos que algunos confundan a Dios y a la religión con los opresores del mundo de los pobres y de los trabajadores, que son, en efecto, el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo.

2 Alberto Devoto está considerado como el miembro más progresista de la jerarquía argentina. Está muy vinculado a los «Sacerdotes para el Tercer Mundo» y ha apoyado muchos de sus pronunciamientos. Hijo de un humilde pintor uruguayo, se ordenó el 6 de diciembre de 1942 en el seminario de Villa Devoto, en Buenos Aires, y fue designado obispo de Goya el 12 de junio de 1961.

Devoto renunció hace tiempo al sueldo que el gobierno paga a los dignatarios de la Iglesia y en diciembre de 1968 se sumó a las protestas de quienes no celebraron la «Misa del Gallo». Sin embargo, es partidario de la no violencia como forma de lucha, aunque manifiesta su admiración por Camilo Torres.